

EL SOCIALISTA

Centroamericano

316



Guatemala: Q 4.00
 Honduras: L 12.00
 El Salvador: US\$ 0.60
 Nicaragua: C\$ 10.00
 Costa Rica: ₡ 500.00

Primera Quincena
 Octubre 2020

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana”

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca

COSTA RICA.- ¡LUCHAS POPULARES, TRAICIONES Y LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA NUEVA DIRECCION PARA GARANTIZAR EL TRIUNFO SOBRE EL GOBIERNO Y EL FMI!



EL SALVADOR.- ¿QUÉ DEBEMOS HACER ANTE LA MANIOBRA DE BUKELE DE ATRASAR EL PAGO DEL FODES?

LA AGRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y LAS REPUESTAS ERRÓNEAS DEL CHAVISMO HUNDEN A VENEZUELA



GUATEMALA.- Giammattei disolvió la caravana migrante



HONDURAS.- Partido Nacional mueve engranajes para controlar las elecciones



NICARAGUA.- Debilitamiento y agonía de la UNAB

COSTA RICA: EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LA CADENA CENTROAMERICANA

El 10 de septiembre del 2018, los sindicatos del sector público agrupados en la "unidad Sindical", convocaron a una huelga indefinida contra el paquete fiscal. Después de una serie de maniobras dentro de la Asamblea Legislativa, el gobierno de Alvarado logró imponer parcialmente el paquete de medidas fiscales y de austeridad conocida como Combo Fiscal. A pesar de los 93 días de huelga heroica, el movimiento sindical fue obligado a retroceder, mordiéndose el polvo de la derrota.

Los éxitos parciales del gobierno de Alvarado al imponer el ajuste, no solucionaron la crisis fiscal ni bajaron el abultado endeudamiento.

A finales de junio y comienzos de julio del 2019, se produjo un primer estallido social en Costa Rica. Teniendo como contexto la huelga de educadores y de estudiantes de secundario, sindicatos y organizaciones populares iniciaron una serie de bloqueos de carreteras y calles, demandando la moratoria del cobro del IVA que acababa de ser aprobado, y una serie de demandas particulares. El poderoso movimiento sindical-popular fue derrotado en la mesa de negociaciones, un sector de la burocracia sindical se prestó al juego. Ese año, los sindicatos del magisterio (APSE, ANDE y SEC) traicionaron a sus bases, negociando el derecho de huelga, aceptando solo 21 días de huelga en educación. A pesar de ello, el año 2019 fue de muchas protestas contra las políticas de ajuste del gobierno de Alvarado.

Esta situación de constante deterioro de las finanzas públicas, explotó a inicios del 2020 con la pandemia de coronavirus, traduciendo en un descalabro de la frágil economía y en la necesidad de nuevos endeudamientos para sostener los gastos mínimos del Estado de Costa Rica. El destape de la crisis muestra cifras alarmantes, por primera vez en la historia el desempleo supera el 20%. La pobreza crece por todos lados. La industria manufacturera está en crisis, y no levanta cabeza.

Todos los sectores sociales están alterados, bajo shock. La pauperización creciente de las masas costarricenses está reflejando un nuevo fenómeno: el crecimiento de partidos de derecha. Este fenómeno de polarización política, por fuera de los partidos tradicionales, ya se había manifestado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2018, cuando Alvarado ganó con el 61% de los votos, contra el 40% del fundamentalista evangélico Partido de Restauración Nacional (PRN). La abstención fue del 35%.

El reciente anuncio de un acuerdo entre el gobierno de Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para oxigenar las deterioradas finanzas de Costa Rica, encendió los ánimos entre la población.

En las recientes protestas de finales de septiembre e inicios de octubre del 2020, surgió el Movimiento de Rescate Nacional (MRN), liderado por José Miguel Corrales, exdiputado y exmiembro del Partido Liberación Nacional (PLN) y Celimo Guido, otro exdiputado y exmiembro del fenecido partido Fuerza Democrática (FD), antecesor del actual Frente Amplio (FA) que ha jugado un triste papel en la lucha popular al convertirse en el principal agente conciliador del gobierno de Alvarado dentro de las luchas populares. El FA es ahora el furgón de cola de las políticas del gobierno de Alvarado.

Mientras los sectores populares se rebelan y, ante el vacío de dirección, colocan como al frente a los viejos políticos que se reciclan al calor de la lucha, un sector de la clase media se horroriza con los bloqueos, refuerza su apoyo al gobierno de Alvarado e implora que la lucha se mantenga dentro de la agotada democracia costarricense.

A diferencia de las protestas del año 2019, donde todavía se apreciaba la conducción de los sindicatos del sector público, en esta ocasión el MRN ha tenido desde sus orígenes una conducción política que refleja más a los desesperados sectores populares que a los trabajadores organizados.

Debido a la derrota de los sindicatos del sector público en el año 2018, este sector ha dejado de ser la vanguardia en las luchas contra los planes de ajuste. Su lugar lo ocupan ahora direcciones que son más proclives a traicionar y a negociar, como ocurrió recientemente con José Miguel Corrales, quien llegó a acuerdos con el gobierno de Alvarado y llamó a la desmovilización. Aunque Celimo Guido se mantiene firme todavía, alertamos sobre el rol de direcciones políticas que no necesariamente son progresivas.

La crisis del capitalismo en Costa Rica está produciendo profundos cambios sociales que, contradictoriamente, debilitan a los sindicatos. Para recuperar la conducción de las luchas populares, las corrientes clasistas y la izquierda debemos impulsar una lucha interna para liberar a los sindicatos de las actuales burocracias que, al igual que José Miguel Corrales y otros más, son propensas a negociaciones secretas con los gobiernos de turno. Además, se debe plantear propuestas concretas para encontrar una salida contra la crisis y rechazar tajantemente los acuerdos con el FMI que humillan al país. Si no lo hacemos pronto, tendremos un crecimiento de la derecha que explotará el vacío de dirección y la trágica política entreguista del "progresista" gobierno de Carlos Alvarado.

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 316
Primera Quincena
de Octubre 2020

Impresión:
13 de Octubre de 2020

DIRECTOR:

Nassar Echeverría

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Alberto Castro,
Melchor Benavente,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:

elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA).

fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



SE CREÓ LA COORDINADORA “ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHAS POPULARES”

Por Ricardo Patzán

La crisis económica resultado de la pandemia del Covid-19 ha tenido efectos desastrosos sobre la clase trabajadora, disminuyendo dramáticamente sus niveles de vida y aumentando la pobreza y la informalidad laboral. La debacle de la economía golpea a una clase asalariada que ya de por sí presentaba bajos niveles de organización y lucha, con aparatos sindicales con poca capacidad de maniobra y cada vez más dependientes de la cooperación extranjera para la obtención de recursos.

Pero a pesar de la difícil situación, en el período de emergencia sanitaria algunos sectores populares han dado importantes luchas, colocándose a la cabeza como destacamentos de avanzada. Uno de ellos ha sido directamente afectado por la crisis, el de los trabajadores del sistema de salud. Médicos, enfermeras, empleados de mantenimiento y servicios, todas y todos han estado en primera línea enfrentando la pandemia y sintiendo en carne propia el desastre que ha resultado de la prolongada desatención de la salud pública por parte del Estado.

Al igual que otros sectores del sector público, el sector de salud cuenta con una importante tradición de lucha. Aunque es notoria la ausencia en la actual coyuntura, del sindicato de salud liderado por el Frente Nacional de Lucha -el más grande del gremio-, que no ha dado señales de vida.

La agrupación más relevante ha sido el de las compañeras y compañeros del Sindicato Nacional de Empleados Hospital San Juan de Dios -SNSJDD-, quienes ha realizado denuncias, plantones y manifestaciones reclamando sus derechos. Este sindicato cuenta con filiales en otros centros hospitalarios, tanto de la capital como del interior y está en una fase de crecimiento.

Adoptando una visión más allá de sus intereses sectoriales, dirigentes del SNSJDD decidieron convocar a otras organizaciones de diferentes ámbitos, sobre todo agrupaciones pequeñas sin vínculos con coordinadoras o centrales



sindicales, para conformar un frente que impulse un programa básico de las reivindicaciones más sentidas por la población trabajadora, que en primer lugar se solidaricen mutuamente con sus respectivas luchas dotándolas mayor fuerza y posibilidades de éxito.

Tras contactar e invitar a diversas agrupaciones, el 26 de septiembre se realizó el Encuentro Nacional de Luchas Populares. Participaron los siguientes organismos: Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Paz, Consejo Comunitario de Desarrollo San José Nacahuil, Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Asuntos Agrarios, Célula Otto René Castillo, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal del Transporte y sus Áreas de Influencia Urbana, Sindicato de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Juventud Obrera Cristiana, Coordinadora de la Legalización de Terrenos de San Miguel Petapa, Asociación Civil el Observador, Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, Colectivo Estudiantil Universitario, Sindicato Nacional de Empleados Hospital San Juan de Dios y el Partido Socialista Centroamericano.

En la actividad un representante de la asociación El Observador presentó un análisis de la actual

coyuntura económica y política; el diputado de la bancada del partido Winaq, Aldo Dávila, habló sobre la importancia de la unidad. La nueva coordinadora adoptó el nombre de su primera reunión: Encuentro Nacional de Luchas Populares. Como una de las resoluciones del encuentro, se decidió elaborar y divulgar un comunicado conjunto en que todas las organizaciones presentes se solidarizan con la lucha que llevan actualmente los estudiantes de la Universidad de San Carlos en rechazo a un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y con la situación de las y los trabajadores de las instituciones estatales creadas por los Acuerdos de Paz de 1996, que están siendo cerradas por el actual gobierno.

El 30 de septiembre las organizaciones dieron lectura al comunicado, en un Facebook live desde la rectoría de la Universidad de San Carlos, tomada por los estudiantes como medida de presión contra la aprobación del préstamo. El comunicado afirma: "...Es importante articular esfuerzos entre diversos sectores sociales organizados, de cara a afrontar las políticas neoliberales, extractivistas y represivas que el actual gobierno de Alejandro Eduardo Giammattei Falla pretende aplicar, en función de garantizar los intereses de las distintas fracciones de la clase dominante...", y detalla las problemáticas de los dos sectores mencionados.

Desde el Partido Socialista Centroamericano apoyamos resueltamente este esfuerzo, impulsando tres pilares básicos para reforzarla: la toma democrática de decisiones, la unidad en acción con otras coordinaciones sindicales y populares, una política clasista e independiente en favor de los explotados y oprimidos.





¡MRN Y SINDICATOS DEBEN CONVOCAR A LA HUELGA GENERAL CONTRA LOS ACUERDOS ALVARADO-FMI!

Por José Rene Tamariz

Las protestas, movilizaciones y bloqueos liderados por el Movimiento Rescate Nacional (MRN), reflejan una nueva situación de la lucha popular en Costa Rica.

En primer lugar, existen diferentes opiniones, planteamientos y caracterizaciones sobre este proceso de protestas. Que son de derecha, anti socialistas, anticomunistas, reaccionarias; otros que dicen que son progresivas; que son un movimiento unitario nacional y otras más.

En segundo lugar, esta es una discusión importante e interesante para el movimiento sindical, popular y revolucionario para extraer las enseñanzas necesarias de procesos de protestas sociales que se van a producir continuamente en el país. Se abre una situación dinámica.

En tercer lugar, es cierto que la dirección política de este movimiento de protesta social y de Rescate Nació no es obrera ni revolucionaria. Los líderes destacados y visibles son José Miguel Corrales, exdiputado y exmiembro del PLN y, Celimo Guido, exdiputado y exmiembro del fenecido partido Fuerza Democrática, antecesor del Frente Amplio. Por ahí también aparece de forma protagónica el líder del sector productivo arrocero y miembro del PLN, Oscar Campos. Entonces, la conducción política del MRN es demócrata pequeñoburguesa por Corrales y Guido. Campos no es de la conducción política del MRN.

Asimismo, los sectores sociales y productivos movilizados son de micro, pequeños y medianos productores diversos arruinados o en proceso de ruina: agricultores, ganaderos, pescadores, coligalleros y otros. Desde el punto de vista sociológico, los sectores movilizados son, principalmente, sectores productivos de la pequeña burguesía, variada. Tanto los sindicatos y los trabajadores movilizados han sido minoritarios: ANEP, ASDEICE, JAPDEVA. No determinan su conducción política. Los grandes sindicatos no han participado.

En cuarto lugar, el programa, pliego de peticiones o propuestas del MRN presentada para negociar con el gobierno de Alvarado es progresivo. Se opone a la venta de activos del Estado; propone

impuestos progresivos que paguen más los que más tienen; plantean no negociar con el FMI, así como otra serie de propuestas correctas.

En quinto lugar, la consigna central del movimiento de protesta social de "No Más Impuestos" es contradictorio, puesto que es un planteamiento que coincide con las diversas cámaras empresariales, la UCCAEP y toda la reacción de derecha. Aquí se encuentra la primera gran contradicción del movimiento de protesta social, una gran confusión política y de clase. En necesario diferenciar y diferenciarse planteando no más impuesto al pueblo trabajador y sí más impuesto al capital y a las zonas francas que no pagan impuestos. Esto debería ser educativo. El problema es que la dirección política, por su carácter de clase, no plantea claramente esa diferenciación.

Pero es importante sostener que en esa contradicción entra la contradicción de la competencia entre grupos económicos. Los micros, pequeños y medianos productores se movilizan y bloquean, mientras que el gran capital se opone a ese tipo de movimiento y protesta. Plantean levantar los bloqueos y cierre de vías. La derecha dura y reaccionaria no está con ese movimiento de protesta. Porque sabe que puede ser un boomerang contra ellos.

En sexto lugar, dentro de este movimiento de protesta social también se moviliza un sector antisocialista y anticomunista que creen que el gobierno de Alvarado es "socialista" y "comunista". Que quiere instaurar el "socialismo". Es una posición política demencial, lo más absurda, puesto que Alvarado y sus lacayos son sirvientes a muerte del capitalismo y siervos del imperialismo yanqui.

La protesta social desarrollada y liderada por el MRN en los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, mediante movilizaciones y bloqueos en decenas de sitios estratégicos, es sin duda alguna una de las más importantes durante el gobierno de Alvarado.

Este gran movimiento de protesta es el resultado de las políticas anti populares, hambreadoras y de miseria provocadas por el gobierno de Alvarado contra la mayoría de diferentes sectores sociales y productivos. Costa Rica es el país que encabeza el primer lugar del desempleo (24,2%) en América Latina; la informalidad se ha incrementado;

miles de micro, pequeños y medianos productores se han arruinado; el hambre, pobreza y miseria han subido como la espuma y así sucesivamente las condiciones de existencia de la mayoría de la población han empeorado hasta el paroxismo. A esas terribles condiciones de vida, el gobierno de Alvarado le pretende sumar el paquetazo hambreador y de entrega al FMI, lo cual llevaría a la liquidación casi total del pueblo trabajador.

La respuesta del gobierno de Alvarado al movimiento de protesta ha sido la represión con gases lacrimógeno y encarcelamientos. El gobierno no quiere negociar, sino reventar el movimiento mediante la represión generalizada a los manifestantes. Esa represión fue solicitada al gobierno por la UCCAEP y otras cámaras empresariales y, respondiendo a sus amos, el ministro de seguridad y Alvarado, obedecieron y ejecutaron en la madrugada del día 2 de octubre la represión en diferentes lugares.

Sin duda alguna, aún con todas y sus contradicciones que tiene esta protesta social, el movimiento es altamente progresivo. Su desarrollo lo ha llevado, bajo duras condiciones de sol y lluvias, a enfrentamientos con el gobierno y hacia un avance en la conciencia en la lucha contra el FMI, el gobierno y sus políticas hambreadoras.

Es urgente y necesario exigirles a todas las organizaciones sindicales (APSE, ANDE, SEC, UNDECA, SITROCIMECA y otras) a sumarse de forma activa a este movimiento de protesta social, mediante la declaratoria de una huelga general que le imponga al gobierno la inmediata suspensión definitiva de sus propuestas fondomonetaristas.

Por todas las anteriores consideraciones, considero que hay que participar de forma activa en el movimiento de protesta social encabezado por el MRN, diferenciándose de las posiciones antisocialistas y anticomunistas. Asimismo, llamo a las bases del sindicato de APSE y ANDE, sindicatos a los cuales pertenezco, a que nos sumemos a la resistencia y lucha en curso, única vía para detener los planes hambreadoras y fondomonetaristas del gobierno de Alvarado. □



CORRALES TRAICIONÓ, PERO LA LUCHA DEBE CONTINUAR: ¡HUELGA GENERAL INDEFINIDA HASTA LOGRAR LA VICTORIA!

Por José Rene Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado junto con el ministro de seguridad, Michael Soto, realizan una tenebrosa amalgama contra el movimiento de protesta social que se desarrolla desde el 30 de septiembre.

Esta amalgama de conjuntar la protesta con la intervención, desde adentro del movimiento, con grupos criminales, delinquentes y narcotraficantes es la preparación propagandística de la opinión pública para reprimir violentamente y de forma generalizada a los manifestantes.

Es importante destacar que, independientemente de la dirección política de los movimientos de protesta social, los sectores lumpen las utilizan para hacer actos indebidos como saqueos a supermercados y tiendas....

¿Qué Pasa en Costa Rica?

La situación económica y social, producto del altísimo desempleo, la gigantesca informalidad, la pauperización y miseria creciente de grandes y amplios sectores sociales y productivos de la sociedad costarricense, sencillamente explotó.

El amplio movimiento de protesta social, principalmente, de las zonas rurales y periféricas, las más empobrecidas y abandonadas por los diferentes gobiernos y, en particular por el gobierno de PAC, pues no hay que olvidar que este partido no tiene siquiera diputados de las provincias más pobres, han entrado a la escena política y pública con los métodos de lucha y resistencia populares más fuertes y duros.

Sectores productivos empobrecidos y arruinados de agricultores, pequeños ganaderos, pescadores,

camaroneros, coligalleros en unidad con sectores populares y diferentes barriadas, acaudillados por el MRN, han desarrollado y protagonizado una real rebelión popular. Es un estallido social popular parecido a los que se han realizado en otros países



latinoamericanos como Honduras, Ecuador, Chile y otros países. Es obvio que no es un proceso obrero ni estudiantil.

Es el clásico estallido de procesos sociales centroamericanos y latinoamericanos. La pobreza y miseria crecientes radicaliza a amplios sectores de capas medias y populares, en nuestro caso rurales, en la lucha y sus métodos en el enfrentamiento con el Estado y sus fuerzas policiales. Eso es lo que estamos viendo: la furia de masas empobrecidas y miseria que no tienen nada que perder porque ya tocaron fondo.

Es urgente y necesario la organización, centralización y la unidad de todos esos sectores radicalizados con los trabajadores, sus organizaciones y aquellos sectores de izquierda que se ubican en este campo de lucha. Los sectores de izquierda abstencionistas o que están por el levantamiento de la lucha callejera como el FA merecen ser

denunciados y repudiados.

La Capitulación de Corrales

Es vergonzosa la capitulación pública de Jose Miguel Corrales, el líder más destacado del Movimiento Rescate Nacional (MRN). Se arrodilló ante el gobierno de Alvarado e hizo un llamado a todos los manifestantes a cesar todo tipo de protesta social, no sólo de los bloqueos sino de toda manifestación de protesta, ya sean marchas, movilizaciones, huelgas y otras formas de ellas.

Lo peor es que en su claudicación pública, Corrales, le hace eco al gobierno que el movimiento fue penetrado por el narcotráfico.

Esa abyecta capitulación de Corrales le da luz verde al gobierno de Alvarado para que reprima de forma más violenta a los manifestantes. Corrales dijo el miércoles 7 de octubre que iba a visitar los diferentes lugares para ver in situ la situación, pero no lo hicieron, sino que salieron con esa deshonrosa claudicación.

Esa dirección pequeñoburguesa liberal encabezada por Corrales no era confiable por su propio carácter de clase. El grave problema es que abrieron grandes expectativas entre grandes sectores sociales, pero estos han sido traicionados y dejados a su suerte y a la represión gubernamental. Celimo Guido ha dicho que se mantendrá en la lucha, esperamos cumpla su palabra, pero no podemos confiar sino solo en nuestras propias fuerzas, por eso insistimos en la convocatoria de una Huelga General, apoyada en los bloqueos y en la lucha popular. Mientras las masas populares mantengan la lucha, nada se ha perdido, surgirán nuevos líderes más firmes y decididos. ■



GIAMMATTEI DISOLVIÓ NUEVA CARAVANA DE MIGRANTES

Por Abelardo de la Torrente

Una vez levantado el Estado de Emergencia debido a la pandemia del COVID-19 en Guatemala, se registró una nueva caravana de migrantes hondureños conformada por tres mil personas, que pretendía entrar al país el uno de octubre por la frontera de El Corinto, en el departamento de Izabal y la de San Pedro Sula, en Honduras.

De hecho, la caravana se conformó en esta importante ciudad del norte de Honduras y pretendía movilizarse por el norte de Guatemala hacia el departamento de Petén y pasar por el punto fronterizo de El Ceibal con México sobre el río Usumacinta, un sitio poco vigilado por las autoridades debido a su situación geográfica, un territorio selvático

Sin embargo, la reacción de los gobiernos, tanto guatemalteco como el mexicano, mostró su claro desprecio a la clase trabajadora hondureña y centroamericana, agobiada por la violencia y la pobreza; y su disposición a ceder ante las presiones del imperialismo estadounidense. Como es sabido, en la retórica racista de Trump, necesita cerrar el paso a la migración procedente del sur del Rio Bravo.

Pero que también responde a los intereses de la burguesía gringa de controlar la cantidad de mano de obra que entra a ese país. En ese sentido, Trump firmó el acuerdo de tercer país seguro con el anterior gobierno de Morales, acerca el cual Giammattei aseguró que iba a ser revisado, pero en los hechos continúa la tarea impuesta por Washington.

Similar caso es con el gobierno "progresista" de Andrés Manuel López Obrador, que, pese a no firmar ningún acuerdo en ese sentido, de igual manera en los hechos usa la recién creada Guardia Nacional (GN), un cuerpo militarizado de seguridad pública para perseguir y actuar como barrera sur de Estados Unidos.

López Obrador, una vez asumió el

cargo, dijo que su gobierno permitiría el libre tránsito por el territorio de mexicano; sin embargo, debido las presiones y negociaciones en torno a ese tema y otros como el Tratado de Libre Comercio, AMLO terminó bajándole la cabeza al racista Trump. Así, pese a hacerse de la vista gorda con la entrada de las primeras caravanas, la última previa al inicio de la cuarentena por la pandemia en enero de este año fue reprimida violentamente por la GN, en el punto fronterizo entre Ciudad



Hidalgo en México y Tecún Umán en Guatemala.

Con respecto a esta nueva caravana, la actuación del gobierno guatemalteco fue congruente con su política represiva. En Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo 18-2020, imponiendo un Estado de Prevención en los departamentos de Izabal, Peten, Chiquimula, Zacapa y El Progreso situados en la ruta de entrada de la caravana, usando como excusa que eran un peligro sanitario. Estas medidas son instrumentos que limitan las libertades y los derechos básicos; en lo que va de su corto gobierno, Alejandro Giammattei ya emitió varios, lo que deja ver el sello de esta administración y el papel que la burguesía y el imperialismo le asignan, en función de la crisis capitalista mundial.

Esta Crisis golpea en Centroamérica fuertemente, siendo los gobiernos de la región incapaces de atender las

necesidades básicas de su población. Mientras que, a las clases dominantes, incapaces de generar proyectos de nación, les queda ser apéndices de las potencias mundiales y de ser elites parásitas, totalmente incompetentes para generar inversión productiva. De ahí que emerjan y se agudicen problemáticas como la migración forzada por motivos económicos y sociales, así como las pandillas, la pobreza, etc.

Las acciones de los gobiernos centroamericanos contra la migración pasan por alto el tratado de libre movilidad CA-4, firmado por los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que realmente ha sido lo único funcional de los procesos de integración. Además, pone en entre dicho toda la institucionalidad centroamericana que poco a coadyuvando al avance del proceso de integración, a excepción de la unión aduanera que es de interés para las burguesías, aunque su avance es lento.

Al final la caravana fue disuelta y la mayor parte de migrantes obligados a regresar a Honduras. Nosotros los Socialistas Centroamericanos, que le apostamos a la unificación socialista centroamericana, reivindicamos la libre movilidad de todas y todos los centroamericanos sin restricción, por el territorio de la región. Exigimos a estos gobiernos no limitar ese derecho. Así mismo reclamamos el derecho de las y los trabajadores de la región a migrar hacia el norte, sin los graves riesgos que afrontan en el territorio mexicano, cuyo gobierno actúa como perro guardián de los gringos, y rechazamos el trato brutal que reciben de las policías fronterizas en Estados Unidos.





CRISIS Y PARÁLISIS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

Por Armando Tezucún

Desde hace varias semanas la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, ha entrado a una grave situación de parálisis, que mantiene detenida la toma de decisiones sobre varios casos importantes que sus integrantes deben conocer. La ausencia de tres de los magistrados de la CC, y la no elección de sus sustitutos, tiene dividido al mundillo político del país, en cuanto a si la corte puede integrarse o no sin ellos, y las posturas reflejan por supuesto diversos intereses; los mismos magistrados en ejercicio de sus cargos no logran ponerse de acuerdo en el tema.

En el año 2018, María Consuelo Porras, magistrada suplente electa por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejó su cargo al ser nombrada jefa del Ministerio Público por el entonces presidente Jimmy Morales, quedando sin reemplazo desde ese año. En julio de 2018 la CSJ nombró como magistrado suplente en sustitución de Porras a Conrado Reyes, pero esta decisión fue revocada por la CC dando curso a un amparo que recordaba que Reyes fue señalado en 2010 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de estar involucrado en estructuras criminales de abogados que hacían adopciones ilegales y narcotráfico. El 25 de septiembre recién pasado la CC dictó la suspensión definitiva del nombramiento de Reyes, quedando vacante el cargo.

En septiembre falleció el magistrado titular Bonerge Mejía, nombrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); este cuerpo aún no ha decidido cómo procederá a elegir su reemplazo, en vista de las dificultades presentadas por la emergencia sanitaria para efectuar reuniones. Ha sido sustituido temporalmente por su suplente María Cristina Fernández. Desde el 9 de julio el magistrado

titular Neftaly Aldana se encuentra gravemente enfermo e imposibilitado de asumir sus responsabilidades; Aldana fue electo por la CSJ, y su suplente era María Consuelo Porras, la actual Fiscal General. La CSJ debería nombrar a un nuevo magistrado titular y un nuevo suplente, pero la CC primero debe decidir si la gravedad del estado de salud de Aldana amerita que se declare vacante su puesto o no.

En ausencia de estos tres magistrados, la CC aún puede reunirse,



pues un pleno ordinario necesita la presencia de cinco de ellos, y para conocer inconstitucionalidades el pleno debe reunir siete integrantes, que se pueden completar con los suplentes. El nudo del problema es que los magistrados de la CC han estado divididos en dos bloques. Un grupo que respaldó las decisiones de la CICIG, han detenido procesos impulsados por los sectores más corruptos del Congreso y el ejecutivo y han tomado decisiones en defensa del Estado de Derecho; entre ellos están la actual presidenta de la CC, la titular Gloria Porras, el titular Francisco Mata, el titular fallecido Bonerge Mejía y el convaleciente titular Neftaly Aldana. Ellos han sido objeto de ataques de parte de los grupos de derecha del Congreso y la CSJ, y sus decisiones ignoradas por el expresidente Jimmy Morales. El otro grupo ha manifestado

afinidad por el expresidente Morales y el actual mandatario Giammattei, así como por los sectores de derecha del Congreso y la sociedad civil; en este bando se encuentran la titular Dina Ochoa y los suplentes Henry Comte y María de los Ángeles Araujo.

Con la ausencia de tres magistrados el equilibrio de poder se ha roto en la CC, y el nombramiento de sus reemplazos es ahora clave para que esta corte se ponga del lado de los poderes corruptos y de extrema derecha, incluso seis meses antes de que los actuales magistrados dejen sus cargos en 2021. La CSJ, controlada por los intereses más oscuros y antidemocráticos, debe nombrar a un magistrado suplente y un titular (si Aldana es suspendido de su cargo por enfermedad); y el CANG, nido de intereses dudosos de todo tipo, debe nombrar un titular.

Por ahora los conflictos se centran en la decisión sobre el cargo de Aldana. El grupo de Ochoa, Comte y Araujo sostiene que la CC no puede sesionar si no se toma una decisión al respecto; las cámaras empresariales de azucareros, industriales y agroexportadores presionan en ese sentido y lo mismo opina el presidente Giammattei.

La complicada situación de la CC refleja el defectuoso sistema de elección de magistrados en el Estado guatemalteco, que permite que sea penetrado por los intereses del gran capital y los poderes del crimen organizado. Por ello nuestra propuesta es que los funcionarios de la CC, así como los de la CSJ y Cortes de Apelación sean electos democráticamente por el pueblo, mediante voto libre y directo; de igual manera, deben poder ser destituidos y revocados en cualquier momento por decisión popular, en casos actos de corrupción comprobados.



¿QUÉ DEBEMOS HACER ANTE LA MANIOBRA DE BUKELE DE ATRASAR EL PAGO DEL FODES?

Por Juan Flores

Los gobiernos municipales también están siendo golpeados por la crisis financiera que afecta al gobierno de Bukele ya que van cuatro meses que el Ministerio de Hacienda no les entrega \$198 millones del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y del 30% correspondiente del préstamo del Banco Interamericano de desarrollo (BID) de \$250 millones que fue asignado por la Asamblea Legislativa.

El no pago del FODES ha impedido que los gobiernos municipales cancelen salarios a los trabajadores, así mismo la no realización de las obras municipales en las diferentes comunidades.

Dicha situación ha llevado a trabajadores, organizaciones sindicales municipales y a los mismos Alcaldes a realizar acciones de protesta y cierres para obligar al ejecutivo la pronta entrega del FODES.

Alcaldes coinciden que se trata de una maniobra política ya que se está a pocos meses de realizarse las votaciones para elegir a los 262 Alcaldes y sus respectivos concejos municipales pluralistas. Al respecto Ernesto Muyschondt alcalde de San Salvador expreso: "...Es lamentable que busquen ahogar a las alcaldías por fines políticos y electorales. No es por falta de dinero. Nunca un gobierno ha tenido tanta disponibilidad de fondos como este gobierno. No es solo a los alcaldes que le hacen daño sino a la población. Es lamentable y condenable" (EDH. 24/09/2020).

En realidad, no se trata solamente de una maniobra política del gobierno de Bukele; la causa fundamental es la falta de recursos para el FODES, lo cual coincide con la lucha librada por Bukele en contra de otras fracciones burguesas emergentes que buscan consolidarse y de sus partidos políticos.

Más que una lucha política

A pesar que los fondos le fueron entregados al órgano judicial y posteriormente al Legislativo, el atraso de la transferencia de dichos fondos, así como también el atraso

del FODES reflejan la crisis financiera del Estado y del gobierno de Bukele la cual apenas empieza. Se deja entrever que actualmente aun los salarios de los empleados se están financiándose vía préstamos, lo cual no es la vía apropiada.

Durante la pandemia hubo mayores ingresos pero fue vía préstamos, a raíz de la misma pandemia y de la cuarentena se espera que la recaudación fiscal sufra una baja la cual según el Ex ministro de Hacienda oscilaría entre los \$990 millones.

los préstamos como alternativa lo cual termina acrecentando más la crisis y es contraria a los intereses del pueblo salvadoreño.

Son los trabajadores quienes en realidad se están viendo afectados ante la no transferencia de los fondos, al agudizarse más la crisis serán los trabajadores públicos, municipales y de las autónomas quienes se llevarán la peor parte y muchas de sus prestaciones económicas y sociales que fueron conquistadas corren el riesgo de desaparecer. Ya hemos visto que el

Ejecutivo y el Legislativo no les importan los intereses del pueblo y de la clase trabajadora.

Por lo anterior como organizaciones sindicales, campesinas, populares, indígenas y estudiantiles debemos:

Rechazar el endeudamiento

Los préstamos no deben ser la fuente principal de financiamiento, como medidas para llevar mayores ingresos al estado tanto el Presidente y los Diputados deben cargar impuestos al gran capital y a la gran empresa, todas aquellas grandes empresas que no paguen impuestos deben pasar a manos de los trabajadores. Los grandes evasores de impuestos deben ser obligados a pagarlos.

El estado debe recuperar servicios como telecomunicaciones, banca, etc. los cuales fueron privatizados en los gobierno de ARENA, las ganancias que ahora quedan en manos privadas deben quedar en manos del estado y servirían para financiar el presupuesto de la república y realizar mayores obras.

No al pago de la deuda externa

Para el primer semestre del 2020 la deuda pública superó \$21,258 millones. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) "...El país que experimentará un mayor nivel de déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) al cierre de 2020 será El Salvador con un estimado del 11.9%



El Estado Salvadoreño está en quiebra, el gobierno de Bukele y los Diputados continúan endeudando más al país, para así poder seguir pagando los grandes salarios a los altos funcionarios de los tres órganos del estado y de las instituciones autónomas, funcionarios de Bukele al igual que los gobiernos de ARENA y del FMLN continua haciendo negocios con el dinero de los préstamos desde la estructura del Estado lo cual golpea también la economía del estado.

Que la "medicina amarga" sea para los millonarios y altos funcionarios

La crisis financiera ya es una realidad, sus efectos apenas empiezan a sentirse han sido los trabajadores públicos del órgano legislativo y judicial quienes se vieron afectados en un primer momento, de igual manera muchas obras realizadas por los gobiernos municipales no han podido realizarse. Ante la falta de recursos financieros el Ejecutivo y el legislativo a pesar de sus pugnas coinciden en



del PIB, seguido de Costa Rica (8.3%), Honduras (6.4%), Panamá (6.2%), Guatemala (5.8%) y Nicaragua (0.8%) y ...estima que El Salvador podría cerrar con una deuda en torno al 92.1 % del PIB, lo que implicaría que por cada \$100 producidos en la economía, \$92.10 serán para pagar deuda”.

La deuda externa está llegando a términos de impago por lo cual la única salida es que es el estado salvadoreño no continúe pagando la deuda externa y que los recursos sirvan para enfrentar la crisis.

Que el gobierno devuelva los fondos de los trabajadores y que se renacionalice el sistema de pensiones

Parte de la deuda pública en el 2019 incluía \$ 5.704 millones de la deuda del Sector Público Financiero en la cual está incluida la deuda de pensiones adquirida a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), o mejor dicho dinero que los trabajadores cotizan a las AFP y que ha sido prestado al gobierno para pagar la pensión a los jubilados de ISSS e INPEP.

El presidente Bukele y los Diputados deben dar prioridad al pago de la deuda contraída por estado con los trabajadores a la vez misma se debe terminar con la AFP y crearse un organismo autónomo tripartito que administre el dinero de las cotizaciones para pensiones de los trabajadores, los fondos con los cuales se queden las AFP entrando a las arcas del Estado. Lo anterior solo es posible si se deroga la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).

No más impuestos para el pueblo, ni privatizaciones que nos perjudiquen

Los organismos financieros podrían utilizar la crisis y el endeudamiento para hacer que el gobierno continúe privatizando partes de los servicios brindados por el estado, debemos rechazar y denunciar todo intento de privatización. Así mismo debemos oponernos a toda iniciativa legislativa que busca aumentar los impuestos como el IVA, renta, etc,

No podemos permitir que se continúen concesionando servicios como seguridad, alimentación, limpieza de las diferentes instituciones del Estado, ya que esta es una forma de enmascarar la privatización.

Reducción de los grandes salarios de los altos funcionarios

Según proyecciones en el 2020, “...el Gobierno de El Salvador pagará más de \$2,962.3 millones en remuneraciones de casi 200,000 empleados, de estos Al menos \$879,799.08 serán para los 10 funcionarios con mejores salarios de todo el Estado. entre los que destacan Daniel Alvarez, Presidente de Cel: \$10,460.00, Salvador Gómez Góchez, presidente de PROESA: \$7,000.00, Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas: \$6,884.58, Oscar Pineda, presidente del Órgano Judicial: \$6,835.3...”(DEM. 09/03/2020)

Altos funcionarios como Magistrados, jueces, fiscales, Diputados, Asesores, ministros, presidente de instituciones autónomas y los demás funcionarios de alto nivel ya no deben continuar cobrando grandes salarios, debiendo devengar un sueldo igual al de un obrero cualificado, de igual manera se les debe retirar beneficios como gastos de representación, gasolina, etc. con ello se estaría ahorrando recursos al estado y asegurándose que las personas que trabajan verdaderamente cuente con su salario.

Alto al aumento de impuestos y tasas municipales

Debemos rechazar toda propuesta de aumento de impuestos y tasas municipales por parte de los concejos municipales, no debemos permitir que los Alcaldes y sus concejos municipales con el aval de los Diputados ante la crisis aumenten los impuestos. Aquellos Alcaldes y concejos municipales que devengan grandes salarios deben de reducirse los.

Combate a la corrupción

Frases como Devuelvan lo robado así como el combate a la corrupción fue uno de los principales eje de la campaña del ahora presidente Bukele, a escasos meses de su gestión salen a florecer casos de supuesta corrupción realizado en su gobierno durante la pandemia por el COVID-19 en donde empresas ligadas con funcionarios realizan negocios con el mismo gobierno para beneficiarse como ejemplo la compra de protectores faciales, mascarillas, etc, a sobreprecio, además de lo anterior también existe señalamientos de doble contrataciones, etc.

Todo pareciera que la corrupción salpica nuevamente al gobierno de Bukele. No es posible que mientras el estado no cuenta con los recursos financieros para cancelar a tiempo los salarios de los trabajadores funcionarios del gobierno estén haciendo negocios.

La corrupción debe ser combatida venga de donde venga los corruptos deben devolver los fondos que se han apropiado del estado no basta sólo que vayan a la cárcel. Los sindicatos de empleados públicos deben denunciar la corrupción y el mal manejo de fondos.

No es posible que mientras la clase trabajadora, la clase media y la micro y mediana empresa paga sus impuestos estos vayan a parar a manos de funcionarios corruptos.

Transparentar manejo de recursos financieros

Es necesario que el pueblo salvadoreño conozca en que se están invirtiendo sus impuestos, préstamos y donaciones. Los gobiernos municipales deben de transparentar el manejo que hacen con el FODES, los cuales no deben ser utilizados con fines electoreros.

Independencia y unidad sindical

Las organizaciones sindicales deben mantener su independencia con respecto al Ejecutivo y los Diputados así como también de los gobiernos municipales y se deben luchar por reivindicaciones propias de la clase trabajadora: como son la defensa y mejora de los salarios, no permitir recortes y despidos de trabajadores, defensa y mejora de contratos colectivos de trabajo, que los trabajadores por servicios profesionales y por contrato pasen a Ley de Salarios, pensiones dignas.

No debemos permitir que sean los trabajadores quienes carguen con la crisis financiera del Estado debemos estar atentos a los planes que buscan implementar tanto los gobiernos municipales y el gobierno central. No se deben descartar los métodos populares de lucha, hemos visto como los alcaldes y los concejos de lucha han recurrido a los mismos y no es posible que cuando los utiliza la clase trabajadora meramente para sus reivindicaciones sean criminalizados.

Es momento que las diferentes organizaciones sindicales planteen la unidad debiendo prevalecer como único interés la defensa de los trabajadores.

No se debe caer en cantos de sirena del Ejecutivo, del legislativo y de los gobiernos municipales, es recordar que estamos en una coyuntura preelectoral mientras pasan las elecciones ofrezcan el cielo y la tierra y luego dirán que estamos enfermos y que nos toca beber medicina amarga. ■



LA AGRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y LAS REPUESTAS ERRÓNEAS DEL CHAVISMO HUNDEN A VENEZUELA

Por **Leonardo Ixim**

La situación social cada vez más aguda, que se refleja en la escasez de muchos productos básicos y en su alto costo, y en el aumento de la desigualdad, se presenta como una espada de Damocles sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Éste a su vez tiene la presión del imperialismo y de las diversas fracciones de la burguesía venezolana para que ceda el control político con que el gobierno ha contado en los últimos años.

Muchas conquistas obtenidas gracias a la movilización popular de finales de la década de los noventa e inicios de la primera década del siglo actual y gracias a los altos precios del petróleo en el presente siglo, se han ido perdiendo. La disminución de estos precios, el agotamiento de un modelo económico que sigue dependiendo del petróleo y las sanciones económicas estadounidenses fueron revirtiendo importantes avances sociales.

En el manejo de la pandemia, si bien podría considerarse oportuno, el país reporta para septiembre 79,117 casos; 69,832 recuperados y 658 fallecidos. El gobierno aduce la fortaleza del sistema de salud, con capacidad de atender a todos los infectados, pero médicos y trabajadores de la salud, en diversos momentos cuestionaron tal situación. Es que producto de todos estos factores, los hospitales carecen de condiciones básicas, comenzando con la saturación y la falta de camas, pese a que el gobierno construyó hospitales de campaña.

Descontento social

Paradójicamente en un gobierno que se autodefine de izquierda, la situación de la clase trabajadora es grave. Ésta manifiesta su repudio ante la situación de escasez de productos, el deterioro de los servicios básicos, los salarios insuficientes que se come la inflación, el aumento de los índices de

pobreza y desnutrición. La respuesta ha sido la migración y la protesta, las cuales son respondidas por el gobierno con represión.

Es importante conocer cómo el proyecto de la revolución bolivariana se fue deteriorando. Comenzando con el origen del chavismo, en cuanto dirección pequeño burguesa nacionalista, conformada por sectores progresistas del ejército, partidos de izquierda reformista, así como buena parte de la organización popular generada posteriormente a la insurrección popular de 1989, conocida como el Caracazo, contra los programas de ajuste estructural.

Chávez conquista el gobierno en 1999 con el Gran Polo Patriótico, creando una nueva Constitución con contenido distributivo e inaugurando la V República. En 2006 se crea el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) fusionándose algunos partidos chavistas, mientras se va controlando todo este tejido social, con el fin de evitar un desborde revolucionario, creando un régimen político cada vez más bonapartista. Si bien se logra reducir la pobreza, esto se hace con programas sociales de corto alcance, algunos clientelistas, y con una que otra medida redistribucionista, como ciertas nacionalizaciones de empresas privatizadas; sin embargo, nunca se quiso tocar los intereses de la gran burguesía. Ésta, acostumbrada sobre todo a la importación vía transferencia de divisas producto de la exportación petrolera, poco fue tocada; y si bien a partir de un sector de la tecnocracia que controlaba la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) realizan un golpe de estado en 2002 derrocando brevemente a Chávez, el cual fue respondido por los sectores populares con su retorno, nunca se tocó los intereses principales de la burguesía. El modelo económico no fue modificado, pese a las promesas de emprender la industrialización, con

lo que llamaron la siembra de petróleo.

Durante y después del golpe de estado, uno de los sectores obreros más combativos fue el de los sindicatos de PDVSA y otras empresas estatales industriales; estos, influenciados por sectores de izquierda críticos como el Partido Socialismo y Libertad, lograron importantes conquistas laborales. Pero con el deterioro de las condiciones de vida, en los últimos años el gobierno se ha negado a renegociar los pactos colectivos y ha perseguido líderes sindicales, encarcelando a algunos como Rodney Álvarez, cooptando además a varios sindicatos.

Para muestra un botón, recientemente la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela ha realizado una jornada de protesta por salarios caídos, así como despidos. En 2019 por ejemplo, trabajadores del metro de Caracas, salubristas, médicos y maestros realizaron una serie de huelgas, lo cual permitió la creación de un frente de organizaciones populares tanto del control gubernamental, como de los partidos derechistas pro-imperialistas, sin embargo, la presión de estos dos polos terminó desgarrando este intento independiente de la clase trabajadora. Recientemente también, en 22 estados se ha protagonizado protestas contra la escasez de gasolina, gas doméstico, el corte de los servicios, etc.; estas protestas han sido fuertemente reprimidas por la Guardia Nacional Bolivariana.

Presión Imperialista

En ese escenario, se ha convocado a elecciones para la Asamblea Nacional el 5 de diciembre. El imperialismo presiona para que estas elecciones permitan a la oposición mantener un margen óptimo de votos, como lo consiguió en 2015; así como evitar cualquier manipulación de los resultados por parte del oficialismo. En 2015 la oposición de derecha, en ese



entonces agrupada la Mesa de Unidad Democrática, logró desbancar al oficialismo, dejando de ser una fuerza marginal y logrando cierto apoyo de masas de sectores descontentos con el rumbo asumido por el gobierno. Esto llevo al oficialismo a convocar una Asamblea Constituyente cuya elección fue calificada de fraudulenta y cuya función no ha sido renovar la Constitución Bolivariana, sino aprobar medidas gubernamentales.

En los últimos años ha habido diversos intentos de diálogo promovidos por varios gobiernos europeos, para que el gobierno liberalice el control sobre las instituciones políticas, sobre todo el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero el gobierno, pese al descontento social, se ha mantenido incólume gracias al apoyo del ejército, cuyos jefes administran parte del sector económico estatal y de algún apoyo de masas con que aun cuenta, además que la mayoría de partidos opositores, por su origen burgués, contemplan programas claramente neoliberales.

La MUD dejó de existir y la oposición se dividió en varias fracciones después de la aventura del títere Juan Guaidos, que como se sabe se autonombró presidente en una operación lanzada por los gringos, siendo reconocido por varios gobiernos del mundo y que contó con intentos de realizar operaciones militares a partir de algunos elementos sublevados del ejército. Por ende, existen fracciones cada vez mas minoritarias que apoyan intervenciones militares, mientras que otras negocian desde distintos ángulos varios aspectos con el gobierno. Ejemplo de eso fue la liberación de varios presos políticos cercanos a partidos de derecha, negociando con el ex gobernador del estado de Miranda y ex candidato presidencial, Enrique Capriles.

En ese sentido el gobierno, por medio del canciller Jorge Arriaza, negocia una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), aunque pareciera que ésta pide concesiones que el gobierno se niega a dar. Por otro lado, Washington amaga la presencia

militar con buques de guerra en el Caribe; acusaciones contra los altos jefes del gobierno de implicaciones en narcotráfico; el bloqueo de barcos con combustible procedentes de Irán y sanciones económicas sobre los fondos de PDVSA, que afectan aún más la maltrecha economía. Aunque al estilo de la zanahoria y el garrote exige la renuncia de Maduro, a cambio aceptar al madurismo como fuerza política; esta situación refleja los amarres del oficialismo con sectores del ejército, a los cuales los gringos no quisieran enfrentarse.



En este marco, la ONU emitió un Informe de Derechos Humanos donde se destaca graves violaciones, lo cual el gobierno obviamente negó y el imperialismo lo usa como otro instrumento de presión.

Una de las características que denota el devenir cada vez más reaccionario de este gobierno, es la recién aprobada Ley Anti-Bloqueo por la Asamblea Constituyente. Argumentando que es una medida necesaria para hacerle frente al bloqueo impuesto por el imperialismo, pretende legalizar el proceso de saqueo, en manos de empresas transnacionales, que tendrán mayor participación en empresas mixtas o aún peor, implicara abrir un proceso de privatización, es decir una forma de transferencia de capital a una burguesía que nace bajo el control del Estado. Y por último, aduciendo que garantizara estabilidad laboral, se esconde el hecho que la composición de las empresas que sufran este proceso, implicara recortes salariales y de planta.

Un reacomodo en el tinglado político

Para las elecciones de diciembre se han reacomodado las fuerzas políticas. Además de la fragmentación de la oposición de derecha, existen otras expresiones que algunas veces estuvieron ligadas al oficialismo, pero lo más destacado es el apareamiento de una coalición de izquierda que se desprendió de aquel, denominada Alternativa Popular Revolucionaria. Este no es el primer desprendimiento por izquierda, pero si el más grande, porque está encabezado por el Partido Comunista Venezolano (PCV), otras fuerzas menores y hasta antiguos militares que estuvieron con Chávez, denominándose chavismo crítico; esta coalición denunció que el CNE les ha bloqueado la inscripción de listas, ha interviniendo en dos partidos dividiéndolos, Patria Para Todos y Tupamaros, así como que la policía política (el SEBIN) ha perseguido y agredido físicamente a sus militantes, antiguos aliados del oficialismo.

Participará también Alianza Democrática, conformada por los partidos Acción Democrática y COPEI, quienes formaron el bipartidismo de la IV República; Avanzada Progresista, del ex militar antiguo aliado de Chávez y gobernador de Zulia, Henry Falcón; Venezuela Unida, conformada por Primero Justicia y Voluntad Popular, de raigambre ultraconservadora; Soluciones de Venezuela entre la que destaca el Movimiento al Socialismo, un histórico partido reformista que proviene del PCV y parte del chavismo en el inicio; y el oficialismo, del que prácticamente queda el PSUV y un nuevo partido creado por Maduro, Movimiento Somos.

Estos elementos, consideramos importantes para que la izquierda continental debata acerca de temas como el régimen político y el modelo económico de estos gobiernos nacionalistas que, si bien se han enfrentado al imperialismo, no rompen con el orden burgués neo-colonial.

3 DE OCTUBRE DE 1963: GOLPE DE ESTADO CONTRA RAMON VILLEDA MORALES

Por Clemente Bardales

La historia de Honduras, como la mayoría de países de Centroamérica, con la relativa excepción de Costa Rica, ha estado plagada de revoluciones fallidas y golpes de Estado que establecieron dictaduras militares. La acumulación de poder económico y político de las Fuerzas Armadas de Honduras viene de ese periodo.

Golpes de Estado en el siglo XX

Además del gobierno "civil" de Tiburcio Carías Andino (1933-1949) que ejerció el poder con el apoyo de los militares, se produjeron otros tres golpes de Estado. El primero ocurrió el 21 de octubre de 1956, cuando un golpe militar destituyó al presidente Julio Lozano Díaz, quien se había proclamado presidente después de un fraude electoral. Se formó una Junta Militar (1956-1957) conformada inicialmente por el general Roque J. Rodríguez, el coronel Héctor Caraccioli y el ingeniero Roberto Gálvez Barnes, más tarde el coronel Oswaldo Lopez Arellano formaría parte de la misma.

El segundo golpe de Estado ocurrió en octubre de 1963, meses antes de finalizar el mandato del popular presidente liberal, Ramon Villeda Morales. Con este golpe de Estado se instauró un largo periodo de gobiernos militares, conocido como "reformismo militar" (1963-1982), que sentó las bases de una relativa modernización del Estado burgués, pero que marcó al mismo tiempo el rol preponderante de las Fuerzas Armadas.

Este periodo de gobiernos militares se interrumpió brevemente con la corta presidencia del nacionalista Ramon Ernesto Cruz (julio de 1971-diciembre de 1972), cuando el general Lopez Arellano propinó en tercer golpe de Estado, reinstaurando los gobiernos militares. El 22 de abril de 1975 el Consejo Militar destituyó a Lopez Arellano por supuestos actos de corrupción y nombró como sucesor al general Juan Alberto Melgar Castro (1975-1978), quien fue sustituido por Policarpo Paz García (1978-1982), siendo este el último gobierno militar.

En el siglo XXI, se produjo el cuarto

golpe de Estado, esta vez contra el presidente Manuel Zelaya (2006-2009).

La transición: "autonomía" para la UNAH y también para las Fuerzas Armadas

Tras el golpe de estado militar preventivo de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas fijaron para noviembre de 1957 la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) compuesta por 27 diputados, encargada de redactar la nueva Constitución que sería promulgada ese mismo año. En esas elecciones, el Partido Liberal obtuvo 209,109 votos, el Partido Nacional ganó 101,274 votos, y el Movimiento Nacional Reformista (MNR) obtuvo 24,489 votos.

La ANC dominada por diputados liberales, eligió el 15 de noviembre de 1957 a Ramón Villeda Morales como presidente, poniendo fin al periodo de gobiernos nacionalistas. Al día siguiente, Gálvez Barnes renunció como miembro de la Junta Militar y fue sustituido por el coronel Oswaldo López Arellano, quien ocupaba el cargo de Ministro de Defensa y gozaba del respaldo de todas las ramas de las Fuerzas Armadas

El 21 de diciembre de 1957, en un acto solemne en el Estadio de Tegucigalpa, Modesto Rodas Alvarado, en su calidad de presidente del Congreso Nacional, le tomó la promesa de ley y le impuso la banda presidencial a Ramón Villeda Morales.

La transición de la Junta Militar al gobierno civil de Villeda Morales fue posible por un acuerdo con la cúpula militar. Antes de entregar el poder, la Junta Militar otorgó la autonomía para la Universidad Nacional de Honduras, una enorme conquista para los estudiantes, mediante la publicación del Decreto No 170, del 15 de octubre de 1957, aprobando la Ley Orgánica de la Universidad de Honduras (UNAH) la que se mantuvo vigente hasta finales del año 2004.

A cambio, la ANC aprobó en la Constitución de 1957 una relativa autonomía de las fuerzas Armadas, las que obedecerían al presidente de la república, pero por la intermediación del "jefe de las fuerzas armadas",

quien debía ser electo por el Congreso Nacional de una terna enviada por el Consejo Superior de la Defensa Nacional. En pocas palabras, el presidente de la república no tenía incidencia directa en el nombramiento y sucesión del jefe de las Fuerzas Armadas. De esta manera, los militares conquistaron su autonomía, que les permitió incidir y jugar un papel de árbitros en la política nacional.

Este status de relativa independencia del poder ejecutivo se mantuvo durante 42 años, hasta el 25 de enero de 1999, cuando una reforma constitucional le permitió al presidente de la república ejercer directamente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. No obstante, a pesar de esos cambios legales, los militares siguen siendo el verdadero poder tras el trono.

El rol bonapartista de las Fuerzas Armadas

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX la economía de Honduras se basó en los enclaves en manos de compañías extranjeras. La oligarquía y la burguesía local eran muy débiles, supeditadas al capital extranjero, especialmente norteamericano.

La huelga bananera de 1954 fue una especie de revolución democrática frustrada que obligó en pocos años a los militares a tomar directamente las riendas del país, para iniciar las reformas democráticas necesarias ante la incapacidad de la burguesía, por un lado, y la fuerza cada vez más pujante de los trabajadores bananeros y sectores populares, por el otro, quienes en su amplia mayoría eran influenciados políticamente por alas de "izquierda" del Partido Liberal.

El liberalismo hondureño está situado, junto con el colombiano, a la "izquierda" del espectro del liberalismo latinoamericano. Las masas populares de Honduras se identifican mayoritariamente con el discurso de justicia social de las corrientes de izquierda del liberalismo. Este factor ha impedido el surgimiento de partidos de izquierda independientes con influencia de masas.

A pesar de las buenas intenciones

y acuerdos suscritos en 1956, las contradicciones entre el gobierno de Villeda Morales, asentado en las ilusiones democráticas de las masas populares, y el rol cada vez más bonapartista de las Fuerzas Armadas, era casi inevitable.

El gobierno "desarrollista" de Villeda Morales

Bajo el gobierno de Villeda Morales se sentaron las bases de la modernización capitalista de Honduras: se aprobó el Código del Trabajo, vieja reivindicación de los trabajadores; se emitió la Ley de Reforma Agraria, se creó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), una Ley de Fomento Industrial, etc. Bajo su gobierno, logró que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara a favor de Honduras, en el diferendo limítrofe con Nicaragua, sobre 8500 kilómetros cuadrados de la Mosquitia.

El boom económico de la postguerra fue aprovechado al máximo por Villeda Morales, y cuya labor fue continuada por los gobiernos del reformismo militar. Los años 60 del siglo XX marcan el surgimiento de una burguesía local, compuesta en su mayoría por emigrantes árabes o judíos, que fueron artífices de la creación de un mercado interno virgen con el impulso de las políticas de sustitución de importaciones del recién creado Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 1960.

El apoyo a la guerrilla antisomocista

Villeda Morales apoyó a la guerrilla nicaragüense. El ex teniente Rafael Somarriba, nicaragüense, se entrevistó en febrero de 1959, en la Habana, Cuba, con Ernesto Che Guevara, para solicitar apoyo en la lucha armada contra la familia Somoza. En marzo de 1959, Somarriba viajó a Honduras y se entrevistó con el presidente Villeda Morales, a quien le entregó una carta firmada por el Che Guevara. Después de una larga conversación, Somarriba y Villeda Morales se pusieron de acuerdo.

¿En qué consistirá mi ayuda?, preguntó Villeda Morales. Somarriba respondió: "El armamento y lo económico lo da Cuba. Necesitamos una pista aérea para desembarcar armas.

También campos de entrenamientos para unos 50 hombres. La pista tendrá que mantenerse abierta para seguir recibiendo apoyo cubano". Se abrazaron en señal de acuerdo.

EL gobierno de Villeda Morales facilitó el territorio de Honduras para organizar campamentos de la guerrilla antisomocista, pero el 24 de junio de 1959 fueron atacados por sorpresa por tropas del Ejército de Honduras, ocasionando la masacre de guerrilleros nicaragüenses en el lugar conocido como El Chaparral, departamento del Valle, Honduras.

Este episodio creó una nueva



fricción entre Villeda Morales y la cúpula militar.

Fallido golpe de Estado y creación de la Guardia Civil

Conociendo el real poder que habían acumulado los militares, Villeda Morales procuró mantener una relación de equilibrio con el Ejército, pero al final no pudo contra ellos. Siempre impulsó en el Congreso que se le asignara a las Fuerzas Armadas una cuarta parte del presupuesto nacional.

En 1959 hubo cuatro intentonas de golpe militar que no progresaron, pero que mostraban la inconformidad y el poder político acumulado por la cúpula militar. El 12 de julio de 1959, el coronel Armando Velásquez intentó un golpe de Estado contra Villeda Morales, apoyándose en la Policía, la que terminó siendo disuelta. Villeda Morales creó un nuevo cuerpo armado de 2500 hombres denominada "Guardia Civil".

Indudablemente, la creación de un nuevo cuerpo armado, por muy pequeño que fuera, provocó recelos con la cúpula militar. Oswaldo López Arellano llamaba "ejército negro" a la Guardia Civil, burlándose del color del uniforme que usaban. La gota que

derramó el vaso, fue la orden de Villeda Morales de que las elecciones de 1964 fueran vigiladas por la Guardia Civil.

El Golpe de Estado del 3 de octubre de 1963

Aprovechando la fecha de celebración del natalicio del general Francisco Morazán, el coronel Lopez Arellano movilizó tropas para derrocar a Villeda Morales. Lo primero que hizo fue rodear, atacar y desarmar los cuarteles de la Guardia Civil, la que fue tomada por sorpresa. Las cifras de muertos nunca se conocieron.

Aviones de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) sobrevolaron el Palacio Presidencial. Al mediodía, un avión de la FAH trasladó a Costa Rica al presidente Villeda Morales y Modesto Rodas Alvarado, presidente del Congreso y líder del PL.

El golpe de Estado fue apoyado por una corriente del Partido Liberal, denominada anti Rodistas, y por el conjunto del Partido Nacional. Algunos de ellos, ocuparon altos cargos en el gobierno militar.

Oscar Flores fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Amado Núñez siguió desempeñándose como ministro del trabajo, Rafael Bardales Bueso como ministro de educación, etc.

Estados Unidos no reconoció al gobierno de López Arellano, por la política que en ese momento sostenía John F Kennedy de "alianza para el progreso", pero como este fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, su sucesor, Lindon B Johnson, terminó reconociendo al gobierno surgido del golpe de Estado. Los gobiernos centroamericanos terminaron reconociendo uno por uno al nuevo gobierno militar.

Una de las primeras decisiones del coronel López Arellano, al propinar el golpe de Estado de 1963 que derrocó al gobierno de Villeda Morales, fue la disolución de la Guardia Civil y la creación del Cuerpo Especial de Seguridad (CES) que en años posteriores se convirtió en Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) y más tarde en Policía Nacional. Desde 1963 hasta 1998, la Policía fue el cuarto brazo o rama de las Fuerzas Armadas.

Y AHORA ¿QUIÉN DEFENDERÁ A LOS DESERTORES?

Por Carlos M. Licona

Ya casi se culmina el año lectivo en el país, lo que fue de mucha incertidumbre a inicios de la cuarentena, ahora ya va quedando dilucidado, y lo que nos refleja la realidad es un enorme porcentaje de deserción escolar, principalmente en las áreas rurales del país. La crisis a nivel mundial desatada por el contagio del COVID-19 ha sido inmisericorde con la población y nuestro país no ha sido la excepción, bajo una dictadura del Partido Nacional que ya lleva 10 años al mando del país y con las riendas llevadas por Juan Orlando Hernández que encabeza un gobierno fuertemente cuestionado por la corrupción y por los vínculos con el narcotráfico, impone al pueblo hondureño sacrificio tras sacrificio mientras los funcionarios de confianza siguen nadando asquerosamente en un océano de corrupción. El tiempo pasa y no se avizora esperanza para el país, excepto un año electoral que se aproxima rápidamente.

Lo que hasta hora arroja estadísticamente la información es que la deserción anda muy alta, era de esperarse, con una gran cantidad de educandos que no tienen las herramientas necesarias ni el acceso a Internet y que por ello se fueron quedando rezagados a punto tal que se han resignado a repetir año.

Alumnos actuales producto del sistema

Desde el 2018, según la Ley Fundamental de Educación todo maestro que aspire a concursar para optar a plaza en educación pública debe poseer un título en grado de licenciatura, lo que deja por fuera a muchos docentes que no lograron estudiar en la universidad y que se quedaron con el título de Maestros de Educación Primaria, cualquiera pensará que esto eleva el nivel académico del docente nuevo, sin embargo, una

cruda realidad se esconde; la gran mayoría de docentes que egresan de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es con el grado de licenciatura en Educación Básica, título que les permite trabajar en los niveles desde primer a noveno grado,



volviendo empírica la educación en los grados séptimo, octavo y noveno. Porque hay algo que no se puede ocultar, estos maestros no salen con una especialidad y no dominan los temas respectivos del tercer nivel de educación básica. Esto no es culpa de los docentes egresados, es culpa de las políticas equivocadas impuestas por el régimen y destinadas a maquillar las reformas sin pies ni cabeza.

Al igual que los docentes, el actual alumno es el resultado de estas mismas políticas, los que se encuentran en último año de educación media, en el 2012 que inició Marlon Escoto como Ministro de Educación cursaban el cuarto grado y los que ahora están en noveno, décimo y undécimo grado apenas iniciaban la escuela ese año, y el resto inició la escolaridad posteriormente al año 2012. Según estudios hechos por la misma Universidad Pedagógica Nacional, el nivel de lectura comprensiva en los alumnos actuales ha retrocedido con respecto a las décadas anteriores, igual el rendimiento en matemática se ha reducido en lo que se refiere a las competencias mínimas de aprendizaje.

Aunque para algunos dirigentes magisteriales ahora salen diciendo que Marlon Escoto tuvo buenas decisiones, lo único real y cierto es que retrocedió la educación pública más de lo que podemos imaginar, basta con hacer una pequeña evaluación de lectoescritura o de operaciones básicas y la realidad sale a la luz.

Este contexto sirve para ubicar la realidad del alumno en el mes de marzo, en que nadie tenía la mínima idea de que se terminaría el año lectivo con educación en línea y se pretendió que por obra y gracia de Dios, los alumnos que tienen poco nivel de comprensión lectora y poca habilidad en el razonamiento matemático cumplieran a cabalidad con los trabajos asignados por docentes que tampoco estaban preparados para el trabajo en línea, lo que sucedió fue por la misma circunstancia que se vino acarreado y orillando al educando; por un lado la terrible situación económica en que se sumergió las familias hondureñas y por el otro; la incapacidad dentro de los hogares de poder llevar al pie de la letra una enseñanza auto formativa, únicamente monitoreada y guiada por los docentes. Fueron pasando los días, semanas y meses hasta que la resignación de parte de los alumnos fue aceptación de perder el año escolar.

¿Qué hacer con esa deserción?

Un maestro con visión revolucionaria lo que menos debe ocurrírsele es pensar que los alumnos simplemente son haraganes, la realidad es que son producto del sistema que hasta ahora les tiene donde están. Una medida que deberían exigir los dirigentes magisteriales, la sociedad, los medios de comunicación y los políticos debe ser en primer lugar un plan de motivación para que esa enorme cantidad de alumnos desertores se reinserte en el sistema educativo, ejecutar un plan de



clases para los meses de noviembre, diciembre y enero combinando la enseñanza virtual con dos visitas a la semana en forma presencial y con medidas de seguridad garantizadas por el Estado. Un bono de compensación para cada alumno para que le sirva para transporte y para alimentación los

días que le corresponda movilizarse. El gobierno debe contratar a la cantidad de docentes como sea posible con el propósito de que estos meses sean los monitores de estos alumnos, al estilo de las escuelitas de vacaciones.

La sociedad tiene un reto por delante en este mes; no orillar a estos

alumnos a la marginalidad, por el contrario, el esfuerzo debe encaminarse a retenerlos y nivelarlos en la medida de lo posible, sería egoísta y simplista de parte de cualquier docente el limitarse a decir "que se aplacen por holgazanes". ■

EL CIRCO DE LA CORRUPCIÓN

Por Sebastián Ernesto González

Este año ha sido la fiesta de la corrupción en el país, la crisis de la pandemia le vino a ofrecer en bandeja de plata a la narcodictadura muchos miles de millones de lempiras, la cantidad saqueada del Instituto Hondureño de Seguridad Social ha quedado minimizada en comparación con lo robado este año. Con un sistema judicial que baila al ritmo del jefe, los funcionarios delincuentes hacen de las suyas a su antojo y la moda son las sobrevaloraciones de todo lo que se compra.

En el 2015 las marchas de las antorchas se realizaron como una condena y repudio al régimen juanorlandista por el saqueo hecho en el IHSS, las enormes movilizaciones fueron canalizadas por los oportunistas y la embajada estadounidense para crear la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) en el 2016, en un primer momento se exigía una CICIH al estilo de la que había en Guatemala, sin embargo, todo el poder y con la complicidad de la OEA se utilizó para aplacar el clamor popular y medianamente crear un aparato internacional que maquillara el rostro del país. Esta institución fue disuelta en enero del presente año al no aprobar el congreso nacional la extensión de la misma.

Mes y medio después de la disolución de la MACCIH el país entró en cuarentena e inició la fiesta que

aún no termina, el Partido Nacional siempre con sus comparsas dentro del congreso y con órdenes desde el ejecutivo emprendieron el mayor saqueo en la historia de país alguno, tan descaradamente lo han hecho que es oprobioso la forma en que han utilizado al más del 60 % de pobres que existen en el país con el fin de robarse



todo lo que se puede, han jugado con el hambre, la salud y la educación del pueblo, pero esto no les importa y siguen saqueando.

Detienen a Marco Bográn

Hoy lunes 5 de octubre han detenido al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Antonio Bográn Corrales, acusado del delito de malversación de caudales públicos por hospedarse junto a otras personas en un hotel de lujo a inicios de la pandemia, el funcionario pasa a ser por un tiempo el chivo expiatorio del régimen que ya es tenido por uno de los gobiernos más corruptos del mundo.

La detención de Bográn es una

acción para desviar la atención y lavarse las manos al estilo de Poncio Pilato, pero en ningún momento obedece a la correcta aplicación de la justicia, de hecho, la mejor prueba de esto ha sido la liberación la semana pasada de los autores intelectuales del asesinato de Bertha Cáceres. Al igual que en días anteriores fue la liberación de Rosa Elena de Lobo, acusada por la MACCIH de corrupción.

En esta ocasión no hay indicio de que haya movilización al igual que en el 2015, el confinamiento decretado por el gobierno lleva como propósito el mantener a la población controlada y generar temor de contagiarse. Con una oposición política que no da muestras de unirse y que por ahora solo ven el proceso electoral del 2021, lo cierto es que los niveles de corrupción son tan elevados

que ya debería existir un frente común de oposición al régimen para ponerle un alto de una vez por todas y para movilizar a la población hasta que caiga.

El pueblo debe entender de una vez por todas que cualquier persona que hable y actúe distanciando la unidad de quien debería ser oposición al régimen no es más que un aliado de los que ahora venden al país. Y cualquiera que luche y trabaje por estar del lado del pueblo peleando en las calles es de verdad el que debe liderar la oposición.

¡Ya es tiempo de poner un alto a este gobierno militarista y delincuencial!





DEBILITAMIENTO Y AGONÍA DE LA UNAB

Por Bismarck Blandón

El pasado 4 de octubre se celebró, con un modesto acto en un salón del Hotel Holiday Inn, en Managua, el segundo aniversario de fundación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). A pesar de la represión sistemática y de la desmovilización general, en ese evento se reunieron cerca de 80 personas, que incluía a los dirigentes principales y una delegación de las madres de presos políticos, que no se cansan de luchar por la liberación de sus hijos.

Los nuevos sujetos

La insurrección de abril del 2018 abrió una situación revolucionaria en Nicaragua. No había una conducción, fue un movimiento espontáneo, una verdadera explosión social. Incluso, no había quien negociara con la dictadura las anheladas elecciones anticipadas.

A inicios de mayo del 2018, la Iglesia Católica creó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), como la contraparte que negociaría con la dictadura en el Dialogo Nacional. La ACJD estaba conformada por el COSEP, AMCHAM y algunos de los movimientos estudiantiles y movimientos sociales que había surgido. Con algunos días de diferencia, se creó también la Asamblea de Movimientos Sociales (AMS) mejor conocida como "Articulación", conformada por ONGs y algunos movimientos sociales.

En ese momento de alza revolucionaria, existían profundas diferencias políticas entre la ACJD y la Articulación, en torno a las negociaciones en el Dialogo Nacional. Al final quedó demostrado que la dictadura no tuvo intenciones de negociar nada, sino de ganar tiempo para organizar el ejército de para militares y aplastar militarmente los tranques.

La creación de la UNAB

Después de las masacres y la represión generalizada contra los tranques, se abrió un periodo de retroceso de la lucha popular. La dictadura había logrado imponer un cambio en la correlación de fuerzas. A pesar de las diferencias existentes, la

UNAB fue creada por el 4 de octubre del 2018, como la primera gran coalición opositora, por un acuerdo entre la ACJD y la Articulación y otras fuerzas políticas como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), como un frente de defensa común para luchar contra la represión, para la recuperación de las libertades políticas, sin abandonar el tema de una posible negociación de una "salida pacífica".

Prueba de ello es que en el "Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia" emitido por la



UNAB, firmada por 41 organizaciones, se acordó que la "la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sería el representante de la sociedad nicaragüense en la negociación" con la dictadura.

Relaciones tensas e inestables

Desde octubre del 2018 hasta enero del 2020, durante 15 meses, la ACJD fue parte de la conducción política de la UNAB. En todo ese periodo, dentro de la UNAB hubo un debate interno sobre la posición conciliadora de la ACJD. Cuando se produjo el segundo Dialogo Nacional, la ACJD se reestructuró internamente, reduciendo el porcentaje de movimientos sociales dentro de su conducción, quedando influenciada de manera directa por las cámaras empresariales (COSEP y AMCHAM), que se negaban a convocar a un paro nacional, como lo pedía la población.

La gran discusión interna giraba en torno a la necesidad de recuperar las calles, organizar la resistencia y preparar condiciones para la desobediencia civil y el paro nacional. Las posiciones se fueron decantando, sobre todo después del fracaso del

segundo Diálogo Nacional.

Aparentemente, el ala izquierda era la Articulación y sus aliados, y el ala derecha dentro de la UNAB lo encarnaba la propia ACJD. Pero extrañamente, ambos polos coincidían cada vez en la salida política-electoral. No obstante, a pesar de las coincidencias, los cálculos políticos de cada uno de estos sectores, los llevaron a separarse finalmente en enero de 2020, algo que causo asombro a muchas personas.

La Coalición Nacional

La ACJD se retiró de la UNAB en enero del 2020. La UNAB quedó bajo el control de la Articulación, el MRS y el grupito de Félix Maradiaga. Con un discurso más radical que la ACJD, esta nueva conducción se resistió a convertir a la UNAB en una nueva fuerza política.

Contrario a lo que mucha gente quería, decidieron continuar con la misma política de la ACJD, pero nada más que separados. Tanto la ACJD como la UNAB llamaron el 25 de febrero de 2020 a conformar la Coalición Nacional, que sería una organización como la primera versión de la UNAB, pero mucho más amplia, esta vez con participación de los viejos partidos políticos colaboracionistas que la población nicaragüense cataloga como "zancudos".

Después de más de ocho meses la Coalición Nacional no ha demostrado ser una alternativa atractiva para las amplias masas, la presencia de los viejos partidos y la negativa de la cúpula de la UNAB que se resiste a crear un nuevo partido político, de orientación democrática y popular, le está pasando la cuenta.

El segundo aniversario de la UNAB encontró a esta organización mucho más debilitada y embarcada en una aventura electorera, abandonando las demandas de la insurrección de abril, acomodándose cada vez más al sistema político que la dictadura ha logrado mantener con vida, precisamente para ahogar el surgimiento de nuevas alternativas políticas.

Lo peor es que ahora la ACJD reniega de la Coalición Nacional, porque se prepara para una nueva alianza con el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y la que sostiene una alianza ultranza con el PLC es la UNAB. □



¿PARA QUÉ SIRVE EL ESTRENADO BLOQUE JUVENIL DE LA COALICIÓN NACIONAL?

Por Lorenzo Martínez

Recientemente, después de muchos meses de estira y encoje en torno al tema de la representación juvenil, el pasado 8 de octubre, siempre en el salón del Hotel Holiday Inn, varias organizaciones estudiantiles y juveniles se presentaron como el Bloque Juvenil de la Coalición Nacional.

Disolución de los grupos estudiantiles y juveniles

La rebelión de abril del 2018 creó el fenómeno del surgimiento de nuevos grupos estudiantiles y juveniles. Estos surgieron espontáneamente como una repuesta ante la masacre del 19 de abril. Sin embargo, la mayoría de estos grupos no tenían experiencia política, y fueron manipulados rápidamente por los empresarios del COSEP y también por los ongs. Ante la ausencia de partidos revolucionarios, estos se presentaban como abanderados de la sociedad civil.

La dureza de la lucha, las masacres y la represión (casi todos los principales dirigentes fueron encarcelados) terminó disolviendo a estas primeras organizaciones. La Coalición Universitaria (CU) desapareció como tal. Una parte terminó siendo controlada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). La otra parte se aglutinó en la Coordinadora Universitaria por Democracia y la Justicia (CUDJ), ligada a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la cual también se fue debilitando en el transcurso del tiempo.

Los grupos que sobrevivieron a la represión se alinearon políticamente, o con la ACJD o con la UNAB. Al final, terminaron siendo satélites de los viejos grupos políticos que actuaban camuflados dentro de estas dos organizaciones, las cuales a pesar de sus diferencias tenían un punto común que las unía: conformar la Coalición Nacional (CN)

El problema de la representación juvenil dentro de la CN

Los viejos grupos que han logrado reciclarse y apoderarse tanto de la ACJD como de la UNAB, tenían un pleito interno por quien terminaría controlando las estructuras de la CN. Ambas organizaciones pensaron en utilizar a los jóvenes a su favor, pero se desató el pleito por quien lograban tener más votos dentro de la CN. La UNAB creó el Sector Estudiantil y Juvenil (SEJ) con la sumatoria de la CUJ y otros pequeños grupos.

Como no se ponían de acuerdo, la CN primero resolvió que ambos bloques de organizaciones juveniles debían elegir un representante, es decir, debían tener una sola representación, lo que provocó el malestar de ambos grupos, ya que obviamente existen muchas diferencias políticas.

En el forcejeo, el SEJ planteó que fueran tres delegados, uno por cada bloque (CUDJ y ACJD), más un representante de las juventudes de los partidos zancudos que formaban parte de la CN (PLC, FDN y YATAMA). Esta propuesta hizo que las organizaciones juveniles de la ACJD se retiraran definitivamente.

Después el SEJ elevó la parada, proponiendo que el 50% de los miembros de la CN debían ser jóvenes, y elaboró una tabla de edades, dividiendo a los jóvenes en tres categorías: (18-27) (28-35) y arriba de 35 años.

Los jóvenes como categoría abstracta

Esta última propuesta era a todas luces absolutamente descabellada. Ya no se discutían propuestas, sino edades. El pleito por la representación juvenil se convirtió en un conflicto entre generaciones (jóvenes contra viejos). En realidad, no existe la juventud en general, existen sectores dentro de la amplia población joven. La mayoría de quienes encabezaron la lucha de abril del 2018, ya no están. Hay un pleito

por apropiarse de la camiseta juvenil, pero dejando de lado las consignas y reivindicaciones de cambio de abril del 2018.

Puñalada contra los grupos juveniles

Mientras se lograba el acuerdo parcial sobre el artículo transitorio del Estatuto de la Coalición Nacional (CN), el bloque de los partidos zancudos (PLC, FDN, YATAMA y PRD (a esta votación se sumó el Movimiento Campesino- MC) decidieron que los jóvenes debían estar incorporados en cada una de sus organizaciones, o sea que no tenían derecho a representación independiente.

Esta puñalada golpeó duramente al SEJ de la UNAB, quienes se retiraron temporalmente en señal de protesta.

El Bloque Juvenil de la Coalición Nacional

Pero al final el SEJ dio su brazo a torcer. El 8 de octubre se anunció formalmente la constitución del Bloque Juvenil dentro de la CN, conformada por las juventudes de los partidos zancudos, más los jóvenes del MC y el SEJ de la UNAB.

En el fondo, se cumplió la misma resolución que ordenaba que los jóvenes fueran representados por las organizaciones a las que pertenecían, con la diferencia que se les permitirá un voto a cada una de las organizaciones. Las juventudes de los partidos zancudos, que no participaron en la rebelión de abril porque eran inexistentes, tienen ahora el mismo voto que los grupos que si participaron. Con ello se anula cualquier propuesta de cambio que el SEJ quiera introducir, porque sencillamente son minoría.

El problema no es tener un voto, sino tener propuestas de cambio para impulsarlas de manera independiente de los partidos zancudos, pero lamentablemente no es así. ■

DEFENDAMOS LA DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL, Y LOS RECURSOS DE AGEPYM

Por Alberto Castro

El día viernes 2 de octubre las instalaciones de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) en San Salvador, fue blanco de acciones violentas y antidemocráticas, al respecto Mario Montes, presidente de AGEPYM, expresó: "Ellos plantean que el 18 de julio hicieron una asamblea extraordinaria en el Mágico González, solicitamos al INDES y nos dijeron que nunca se celebró ninguna asamblea [...] Ahora plantean que tienen apoyo del ministro de trabajo; es más, las personas que se tomaron el edificio pertenecen a ellos, al ASTRAM y del STISSS, son las organizaciones que han confabulado tomarse el edificio." Cabe destacar personas dirigentes de estas organizaciones sindicales respaldan al Gobierno de Bukele, lo cual les hace merecedores del apoyo de Rolando Castro Ministro de Trabajo, Ministro de Trabajo pudiendo ser lo anterior parte de la lucha política del Ejecutivo.

Rechacemos toda práctica antidemocrática

La toma de dichas instalaciones y el irrespeto a la democracia interna de AGEPYM debe preocupar a todas las direcciones sindicales, pues en este caso estaríamos ante un ejercicio de una práctica de imposición direccional de organizaciones de trabajadores, es decir un corporativismo.

Estas personas ingresaron por la fuerza ejerciendo violencia de principio a fin; sacaron de las instalaciones a Mario Montes presidente de AGEPYM, mantuvieron la toma hasta el sábado 3 de octubre por la tarde, por su parte la Junta Directiva de AGEPYM, quedó a expensas de la intervención de la Fiscalía General de la República, para la inspección debida y así deduzca responsabilidades penales en torno a estos actos.

Intereses financieros y políticos

AGEPYM es una organización que por su naturaleza no es una organización sindical, sin embargo al ser sus afiliados empleados Públicos y Municipales, le hace estar vinculada con actividades de interés para



los trabajadores, dónde confluyen intereses comunes con organizaciones sindicales, estableciendo así vínculos cercanos con dichas organizaciones; por tanto no es extraño que tenga mucha influencia en ellas.

AGEPYM cuenta con fondos derivados de las aportaciones de su membresía en concepto de cuotas, además de ya haber acumulado cierto patrimonio, eso le vuelve apetecible a lo ojos de oportunistas y corruptos, para hacerse de su control y de esta forma apoderarse de los recursos de dicha organización.

Lo acontecido en AGEPYM es la misma receta aplicada al STISSS, cuando Monge aprovechado el patrocinio del Ministro de Trabajo, monto una "Asamblea" para destituir a la Junta Directiva que administraba en ese momento al STISSS la cual también es de mencionar que había entrado en contubernio con el gobierno del FMLN.

Lo del viernes 2 de octubre en AGEPYM no fue una simple pugna entre direcciones, se trata de un asalto violento, y una respuesta defensiva por parte de la Junta Directiva.

Más de lo mismo

La forma como se han celebrado las elecciones en AGEPYM pese a cumplir con formalidades, no son totalmente democráticas, hay una camarilla que se alterna como rueda de caballitos en los cargos de dirección, lo cual es necesario resolver, no obstante lo realizado por las personas afines al gobierno tampoco es correcto y deja la interrogante respecto a los fines con los cuales quieren recuperar la organización.

La historia del STISSS se repite en AGEPYM, y al ser avalada jurídicamente violentado el estado democrático de derecho, lo que demuestra que el gobierno quiere una organización dócil para ello legaliza dicho hechos y de esa manera los dirigentes que reemplacen a otros ya van previamente comprometidos.

Que la Asamblea General decida

AGEPYM debe ser devuelta por la vía democrática a los Empleados Públicos y Municipales, por lo cual es un momento adecuado para plantear la realización de una Asamblea General Extraordinaria, en donde se garanticen las condiciones que permitan la libre y democrática participación de todos las personas afiliadas, que todas las personas puedan optar a cargos de dirección y además que se abran los libros de contabilidad para que todos los afiliados puedan conocer cuánto son los recursos financieros que se tienen y en que se están invirtiendo.

Siendo AGEPYM una organización representativa de los trabajadores de las instituciones públicas, municipales y autónomas debe tomar un papel activo en los problemas que afectan a los trabajadores tal es caso del tema de pensiones, lucha contra la privatización de servicios públicos, ley de la función pública. Además se garantizar la independencia de AGEPYM de todo partido político. ■



NACIONALISTAS MUEVEN ENGRANAJES PARA CONTROLAR LAS ELECCIONES

Por Rubén Molina

Desde antes que Ana Paola Hall oficializara la convocatoria a elecciones primarias el pasado 14 de septiembre a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) —institución que preside en reemplazo de Rixi Moncada—, el Partido Nacional inició una serie de movimientos que tienen como objetivo preparar el recambio de la dictadura por otros cuatro años.

Los ambientes favorables para la dictadura van desde el consenso entre bancadas en el Congreso Nacional, para impulsar los artículos transitorios de la nueva Ley Electoral aprobados el pasado 1 de octubre; la desestimación de candidatos en elecciones primarias para lograr candidaturas únicas que perfilen a Mauricio Oliva como candidato con mayor intención de voto —a costa de asesinar políticamente a Tito Asfura quien es señalado por la Uferco—; y finalmente, los nacionalistas le han concedido a los banqueros afines a su gobierno (los Atala en este caso) el control de instituciones como la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), una estrategia que puede ocultar cualquier blanqueamiento de dinero que proviene del narcotráfico, que es desembolsado en la mayoría de los casos a través de cuentas bancarias, un escenario que permitirá el libre financiamiento por parte de carteles que coquetean con Hernández y demás personajes de su gobierno.

Consenso entre oposición y nacionalistas en aprobación de artículos transitorios de nueva ley electoral

El Congreso Nacional producto de un consenso total entre bancadas, aprobó los artículos transitorios que contemplan un escenario electoral construido tanto por la oposición como por el partido de gobierno. Las tensiones terminaron, y Libre se prepara para reunir votos suficientes para cambiar

la lucha frontal en las calles, por la “lucha” electorera. Estos artículos transitorios aseguran las elecciones primarias 2021, un censo electoral depurado y la vigencia de la nueva tarjeta de identidad, reivindicaciones del CNE acuerpado por Libre.

“Entre lo aprobado (de los



artículos transitorios) destaca el Censo Nacional Electoral Provisional que será utilizado para efectos de las elecciones primarias 2021; los plazos en que se debe de realizar el Censo Nacional Electoral Provisional; El Censo Nacional Electoral Definitivo; El listado definitivo de electores; la creación del Sistema Integrado para la Inscripción de Personas Fallecidas y; la vigencia que tendrá la actual Tarjeta de Identidad” (La Tribuna, 1 de octubre de 2020).

Maniobra de nacionalistas contempla desechar aspirantes para buscar candidatura única en Mauricio Oliva

No es nada descabellado suponer que el candidato del movimiento “Juntos Podemos”, el actual presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, colocara en el centro de la mesa de negociaciones con los órganos de investigación criminal, —en este caso la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), misma instancia que desplazó a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción

(Ufecic-Maccih)— a su contrincante de la corriente “Unidad y Esperanza” Nasry “Tito” Asfura.

“Se dio a conocer el documento con las acusaciones en contra del titular de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Asfura y a un grupo de sus colaboradores. Los mencionados son responsables de cometer delitos relacionados con el abuso de autoridad, lavado de activos, sustracción de fondos públicos y malversación de caudales públicos que fueron depositados en cuentas personales” (Noticias 24/7, 3 de octubre de 2020).

En Honduras la tradición ha colocado como inminente candidato victorioso del poder ejecutivo al funcionario que ocupa la presidencia del poder legislativo, así ocurrió con el actual dictador Hernández, que ocupó el puesto de presidente del Congreso en el año 2010. Tradición que los nacionalistas seguirán consumando a fin de seguir en el poder.

Sin delito de lavado de activos señalado por la CNBS, hay mayor financiamiento de campañas electorales con dinero del narcotráfico

El Congreso Nacional aprobó a Banco Ficohsa de los Atala, un fideicomiso que permite tener el control de la institución reguladora de las finanzas hondureñas el pasado 1 de julio; una estrategia que busca enmudecer las sanciones por lavado de activos a la banca que tramitará en los próximos meses, dinero de campañas electorales proveniente del narcotráfico. Debemos estar atentos a esta serie de movidas que los nacionalistas emprenden con el afán de montar las condiciones electorales más favorables, que los coloquen de nuevo en un tercer periodo de gobierno; a la vista y paciencia de la oposición burguesa.





NUEVAS SANCIONES SON EL PRELUDIO DE LA NEGOCIACIÓN SOBRE REFORMAS ELECTORALES

Por Victoriano Sánchez

Al acercarnos inexorablemente al año 2021, ejecutando un plan preconcebido, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos están apretando las clavijas contra la dictadura Ortega-Murillo. En esta ocasión, la justificación no han sido los crímenes de lesa humanidad, sino la aprobación de un paquete de leyes por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua, férreamente controlada por la dictadura, que restringen aún más las escasas libertades democráticas.

La Resolución del Parlamento Europeo

Con 609 votos de los 694 diputados, el Parlamento Europeo aprobó, el pasado 8 de octubre, una resolución que amenaza a la dictadura Ortega-Murillo con posibles sanciones. El eje de ataque fue la posible aprobación de la "Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros" que establecería estrictos controles sobre los ongs que, en su mayoría, reciben fondos de fundaciones y gobiernos europeos

Aunque las resoluciones del Parlamento Europeo son de naturaleza política y no son vinculantes para los organismos de la Unión Europea, queda claro que las presiones están destinadas fundamentalmente a lograr una negociación entre la dictadura y la oposición sobre reformas electorales.

El punto seis de dicha Resolución "(...) pide al Gobierno de Nicaragua que llegue a un acuerdo por medios democráticos pacíficos y negociados con los grupos de la oposición, incluida la Coalición Nacional, sobre las reformas electorales e institucionales necesarias para garantizar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, actualmente previstas para noviembre de 2021, todo ello de conformidad con las normas internacionales y aplicando asimismo las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y de la Organización de Estados Americanos; indica que, a tal fin, deben asistir a dichas elecciones observadores nacionales

e internacionales debidamente acreditados".

Aunque la Resolución no contiene ninguna sanción específica, amenazó a la dictadura Ortega-Murillo que, si no retrocede en la aprobación del cuestionado paquete legislativo, la Unión Europea podría activar "la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica", un tratado de libre comercio con Europa que entró en vigencia en el año 2013, y que puede ser suspendido por violación a los derechos humanos y al sistema democrático.

Nuevas sanciones de Trump

Al día siguiente, como un plan coordinado, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncio nuevas sanciones para altos funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo. Esta vez le tocó el turno a Ana Julia Guido, Fiscal General, a Paul Oquist, un norteamericano nacionalizado nicaragüense que funge como secretario personal de Daniel Ortega, y a la cooperativa de ahorro y préstamo CARUNA R.L. Esta última institución ha sido acusada de lavar más de 2,500 millones de dólares de la cooperación petrolera venezolana

Desde la rebelión de abril del 2018, Estados Unidos aceptó en los hechos la sobrevivencia de la dictadura de Ortega, a cambio de restaurar el orden y hacer reformas de cara a la elección de 2021. Debido al endurecimiento de la dictadura, la administración ha mantenido una dosificación de presiones sobre la dictadura para obligarla a negociar las reformas electorales que permitan "elecciones libres".

No fue una casualidad que el primer sancionado, en diciembre del 2017, fuera Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), acusado de organizar sucesivos fraudes electorales. En julio del 2018, cuando se desarrollaba la "operación limpieza" contra los tranques, Estados Unidos sancionó al comisionado Francisco Díaz, sub jefe de la Policía Nacional, y a Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía

de Managua, uno de los principales operadores políticos de la dictadura.

En noviembre del 2018, Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional.

Después del fracaso del segundo Dialogo Nacional, en junio del 2019, continuaron las sanciones contra otros altos funcionarios: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Sonia Castro, ministra de salud, el ahora difunto Orlando Castillo, ministro de TELCOR, y Oscar Mojica, ministro de transporte. En noviembre del 2019, fueron sancionados Ramón Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional, Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Supremo Electoral, y Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

En diciembre del 2019, fueron sancionados los negocios relacionados con PETRONIC, la caja chica de la familia Ortega-Murillo. En marzo del 2020, fue sancionada la Policía Nacional como institución. En mayo del 2020, fueron sancionados el general Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército Nacional (EN) e Iván Acosta, ministro de hacienda.

Casi todos los ministros han sido sancionados, pero la dictadura se ha mostrado reacia a negociar, aunque cada día está más debilitada.

Represión y sanciones

La dictadura ha resistido al máximo, manteniendo los niveles de represión para atomizar la resistencia popular, esperando el momento preciso para negociar. Ese momento está llegando. La andanada de sanciones solo está preparando el terreno para esa negociación que ya no pueden posponer.

Las sanciones les permiten a Estados Unidos y Europa imponer un control sobre cualquier negociación, en beneficio de los empresarios, en detrimento de las reivindicaciones de abril del 2018. ■